

el tema de la pena de muerte y el de refuerzo de la Policía política provocaron grandes discusiones. Pero el testimonio de Lorenz y su oposición a la pena de muerte pesarán mucho.

No es Alemania Federal el único país en el que se debate la pena de muerte. En Francia, donde existe, aunque se aplica muy escasas veces, el ministro de Justicia y hombre de confianza de Giscard, Pontiatowski, insiste con frecuencia y vigor en que debe haber condenas de muerte y se deben cumplir. No es sólo en este tema: una mayoría de la población francesa parece también partidaria del mantenimiento de la guillotina como institución (estas encuestas tienen en este caso un valor relativo: se hacen en el momento o a continuación de grandes sucesos sangrientos, y se impregnan de la emoción del ambiente).

Dos naciones han restaurado la pena de muerte: Japón y Filipinas. Suecia, en cambio, la ha abolido totalmente de sus Códigos. Argentina la abolió en 1973 en el Código Civil, pero la mantiene en el Militar. Canadá ha abierto una moratoria de cuatro años en las ejecuciones, con el fin de estudiar estadísticamente la variación de los delitos durante este tiempo. En algunos países federales —Estados Unidos, Australia, México—, algunos Estados mantienen la pena de muerte, otros la han abolido.

La tendencia mundial es la abolicionista. Dentro de esta tendencia, los grupos de derecha conservadora o los países dirigidos por ella son

partidarios de la pena de muerte, los liberales y de izquierda son abolicionistas, y lo explican, más que en defensa de los condenados (que pueden regenerarse o pueden haber sido erróneamente condenados), en defensa de la misma sociedad, de su dignidad y de su moral: Creen que a una sociedad violenta corresponderán unos marginados violentos. Corresponde esta separación a las bases filosóficas de las doctrinas: la derecha cree en la maldad del hombre —el pecado original—, que requiere fuerza y castigo para contenerle; la izquierda, en una bondad natural, que estaría alertada por la mala organización de la sociedad, y, por lo tanto, cree que las reformas sociales son mejor que el castigo.

Las Naciones Unidas se han pronunciado numerosas veces en contra de la pena de muerte y han instado a las naciones miembros a la abolición: tanto por parte del Consejo Económico y Social —que ha realizado un informe acerca del tema— como por la Asamblea General. Los estudios estadísticos realizados en los años 1962 y 1972 por las Naciones Unidas demuestran que la pena de muerte no es un arma disuasoria del crimen: los mismos delitos se cometen en países abolicionistas como en países ejecutores; dentro de los países que han suprimido la pena de muerte no ha habido aumento en la criminalidad. El secretario general de las Naciones Unidas, Waldheim, dice en un informe actual que estos informes han promovido una mayor tendencia al abolicionismo en los países miembros. ■

CHILE

El caso Bonilla o un helicóptero con mala suerte

● Los helicópteros son aparatos que vuelan, pueden sufrir un accidente y caerse. En ese caso es muy frecuente que sus ocupantes se maten. El helicóptero en que viajaba el general Oscar Bonilla, ministro de Defensa chileno, se cayó el 3 de marzo y el general se mató. La explicación oficial: accidente. «Una desgracia para el país», declaró Pinochet. Tres días de duelo nacional y todo en orden.

Nadie, aparte de los íntimos que hayan podido estar en la organización de un eventual atentado, tiene todavía elementos para desmentir esta cómoda versión. Pero eso no puede impedir que se señale una serie de factores que hacían de esa muerte algo teóricamente deseable para la ultraderecha chilena. Ni puede impedir que se recuerde que esa misma ultraderecha no ha vacilado en utilizar medios expeditivos para eliminar a generales molestos: René Schneider, asesinado en 1970; Bachelet, cuasi asesinado (torturas que le provocaron su tercer infarto), a comienzos de 1974, y Carlos Prats,

asesinado en Buenos Aires en octubre del mismo año.

Bonilla no era ningún ángel. Fue el hombre que enfrentó a Prats, comandante en jefe del Ejército y ministro de Defensa de Allende, para resquebrajar su autoridad y remover el último obstáculo institucional-militar que se oponía al golpe de Estado (por ese entonces, Pinochet todavía seguía jurando lealtad al Presidente). La mujer de Bonilla encabezó la manifestación de esposas de oficiales que abuchearon a Prats durante horas frente a su casa y lo llevaron a la dimisión en agosto de 1973. Durante y después del golpe, Bonilla, ministro de Interior del nuevo Gobierno, fue cabeza y brazo de la implacable represión que se abatió sobre los chilenos.

Pero el general tuvo la habilidad de combinar este aspecto abominable de su faena con una demagogia populista que lo llevaba a visitar las poblaciones marginales, a decirse preocupado por la suerte de miles de desocupados, a proponer, por fin, una reducción de la represión

seis meses después del golpe, probablemente en vista del peligroso aislamiento político del Régimen. De hecho, las torturas y las detenciones disminuyeron sensiblemente entre febrero y julio de 1974, y volvieron a recrudescerse con la designación del actual ministro del Interior, general Benavides.

Hombre públicamente vinculado a Eduardo Frei, de quien fue su edecán militar durante su período presidencial (1964-70), llegó a ser considerado la principal figura visible de las «palomas» (en un reino de «halcones»), interlocutor válido para la contestación de la Iglesia, personaje de recambio para una apertura menos antidemocrática del Régimen (margen de libertades políticas, cese de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos, incorporación de civiles al Gobierno, etcétera), que contaría con el apoyo de la cúpula demócrata-cristiana. Se habló entonces que otros dos generales importantes, Arellano y Palacios, formarían parte del «grupo Bonilla».

Su desplazamiento del Ministerio del Interior al de Defensa, a mediados del año pasado, nunca tuvo



General Oscar Bonilla: ¿accidente o atentado?

una explicación definitiva. Para algunos fue un ascenso que lo colocaba en mejor posición para un eventual relevo de Pinochet; para otros, una disimulada caída en desgracia.

Su dura polémica con el presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, hace unos meses, fue interpretada por los partidarios de la segunda versión como un intento de «hacerse perdonar» sus veleidades progresistas.

Mientras tanto, la disputa por el poder entre las distintas Armas que participaron en el golpe contra Allende se iba definiendo primero a favor del Ejército, y dentro de éste, netamente por un fortalecimiento del general Augusto Pinochet, en un primer momento presidente de la Junta Militar; después, Jefe de Estado, y ahora, Presidente.

Este encumbramiento no se alcanzó sin fricciones y depuraciones. Fueron muchos los militares que durante este año y medio pasaron a retiro, y solamente durante el último mes, cuarenta coroneles fueron licenciados.

Bonilla era un obstáculo de mayor altura: además de tener la titularidad del Ministerio de Defensa, era jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas: una concentración de poder que tenía que alarmar a los «duros». Más, cuando por tener la primera antigüedad del Ejército, era el sucesor obligado de Pinochet.

Curiosamente, Bonilla, cuya locuacidad parecía incontrolable, desaparición de todo contacto público entre noviembre y diciembre del año pasado. Entonces corrieron rumores de que había sido arrestado; tan insistentes, que hicieron necesario un desmentido oficial que calificó las versiones de «ridículas y pueriles».

Queda, por fin, un dato que puede encerrar una especial importancia: Kissinger, según se anunció, viajará a Chile en abril, y Bonilla, cabía esperarlo, sería una de las personas con quienes conversaría si los manes de Washington se inclinan por un lavado de cara del Régimen chileno. Algo que puede volverse una necesidad para los norteamericanos, dado el unánime repudio internacional que se ha ganado el Gobierno de Pinochet, y que, inevitablemente, arrastra también a los Estados Unidos, cómplices confesos (después de las declaraciones de Ford y Kissinger admitiendo la participación de la CIA) del derrocamiento de Allende.

La muerte de Bonilla, si ella no se debió a los desperfectos de un helicóptero desventurado y a la consiguiente acción de la ley de gravedad, puede ser una advertencia seria para los militares partidarios de una apertura, buscaría cohesionar a las Fuerzas Armadas en base al terror interno e indicaría que el Régimen chileno ha decidido que su único argumento de supervivencia seguirá siendo la intensificación del crimen, sea quien sea la víctima. Aunque se trate de un viejo cominche. ■

U. S. A. / CUBA

Una diplomacia lenta

● Kissinger, el 1 de marzo, hablando en Houston: «Si las sanciones decididas en 1964 por la Organización de Estados Americanos

se levantasen, los Estados Unidos estarían preparados para moverse en una nueva dirección en sus relaciones bilaterales con Cuba». Peque-